

Informe Sobre las Elecciones del 7 de Octubre en Venezuela

*Genaro Arriagada & José Woldenberg**

Septiembre 2012

Las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre en Venezuela no serán unas más. Tienen una importancia capital. El Presidente Chávez, luego de 14 años en el gobierno, pretende una nueva reelección por seis años. Estas elecciones se llevan a cabo en medio de un agudo proceso de polarización y con marcadas condiciones inequitativas en la competencia, junto con fórmulas de identificación, votación y cómputo de los votos que ofrecen márgenes importantes de certidumbre. Son dos caras de una misma moneda que además abre amplios márgenes para la especulación en torno a los posibles desenlaces del proceso.

Nuestro informe se divide en tres grandes apartados: a) un repaso a la situación que guarda el sistema electoral en el sentido estrecho del término, b) un análisis de las condiciones en las que transcurre la competencia y c) un esbozo de los posibles escenarios.

I.- EL SISTEMA ELECTORAL ¿CUÁN CONFIABLE?

Por más de una década el sistema electoral venezolano ha sido objeto de controversia. Un debate que traduce una preocupación muy legítima y anhelos de justicia y transparencia pero que, también, puede estar contaminado por prejuicios y propósitos políticos subalternos.

Este interés por el sistema electoral no fue muy importante en la medida que los resultados electorales mostraban una enorme distancia entre Chávez, y sus competidores: en 1998 Chávez ganó a Salas Romer por 16,2 puntos porcentuales; en 2000 a Arias Cárdenas por 22,3.

Es a partir del Referendo Revocatorio, de agosto del 2004, que la descalificación del sistema electoral toma fuerza, aun cuando en esa ocasión un fraude masivo no

pudo ser probado, quedando la acusación en afirmaciones tan generales como las de un informe de ese año en que, parafraseando a Karl Popper, se dice que el observar 1.000 cisnes blancos (esto es mesas sin fraude) no demuestra la veracidad de la tesis de que todos los cisnes son blancos y que, por el contrario observar un cisne negro (una mesa con fraude) basta para rechazar la tesis de que todos los cisnes son blancos.

Hoy no existen dudas de que esas acusaciones de fraudes masivos no probadas fueron, además, un error político de la oposición que contribuyó a dos grandes derrotas. La primera, la negativa a participar en las elecciones parlamentarias de 2005, que le entregó a Chávez el control absoluto de la Asamblea Nacional; y, luego, la presidencial de 2006 donde Chávez aventajó al candidato de la oposición, Rosales, por 26 puntos porcentuales.

El período 2005-2006 caracterizado, entre otras cosas, por la descalificación del sistema, aparece como el momento en que la oposición tocó fondo. Cabe señalar que en esta apreciación tan negativa del sistema electoral la oposición venezolana no tuvo el respaldo de la comunidad internacional que en general (las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, el Centro Carter) lo juzgó, no obstante fallas, como confiable.

A partir de 2007 esta situación empieza a cambiar. En diciembre de 2007, en el referendo sobre reforma constitucional Chávez sufre una derrota donde la oposición logra aventajarlo por el 1,3 por ciento de los votos emitidos. Al año siguiente, 2008, en las elecciones regionales, el oficialismo se recupera y obtiene una victoria categórica, pero que se ha reducido a 11 puntos. En 2009, obtiene un nuevo triunfo, cuando por 54 contra 46 por ciento gana el referendo que permite la reelección

* **José Woldenberg** es académico y analista político. Fue consejero presidente del IFE de 1997 a 2003 y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); **Genaro Arriagada** fue Ministro de Estado durante la presidencia de Eduardo Frei y posteriormente Embajador de Chile ante los Estados Unidos.

presidencial indefinida. Sin embargo, en las parlamentarias de 2010, Chávez va a obtener el 47 por ciento de los votos, contra un 49 de la oposición, si a la Mesa de Unidad (46%) se le suma el 3 por ciento de la votación del Partido Patria para Todos.

En el contexto de estos cuatro procesos electorales, el sistema ha ganado legitimidad. ¿Cómo desconocerlo totalmente sin considerar que en dos de las cuatro últimas votaciones ha reconocido el triunfo de la oposición? Ello no es óbice para señalar sus limitaciones, pero no en magnitudes tales que impidan actuar dentro de él. Las reuniones que sostuvimos con sectores de la oposición, especialmente la Mesa de Unidad (MUD), con directivos de los principales medios de comunicación independientes o adversarios del gobierno de Chávez, y con ONGs independientes de observación electoral, confirman esa apreciación lo que hace que la denuncia del sistema como fraudulento haya quedado reducida a grupos minoritarios. Fue nuestra impresión, además, que la insinuación por algunos sectores gobiernistas de que el sistema no asegura el secreto del sufragio, puede ser una estrategia para desalentar el voto contrario al gobierno: ¿para qué votar por la oposición si ella de todas maneras va a ser derrotada por el fraude?

Entre las mayores fallas del sistema está la politización del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos cinco rectores representan líneas partidistas: cuatro alineados con el gobierno y uno con la oposición. Este hecho, según sus críticos y también en nuestra opinión, explica la tibieza con que esta institución enfrenta el ejercicio de algunas funciones regulatorias, especialmente en lo que se refiere al abuso de la propaganda oficial.

Sin embargo, el sistema tiene innegables fortalezas y es tecnológicamente muy avanzado. La identificación de los electores a través de “máquinas capta huellas (dactilares)” o sistema de identificación biométrica, ha llevado a algunos a acusar que ello permite no sólo conocer con exactitud al elector sino, también, dejar un registro de por quién votó. El juicio hecho por auditores externos al CNE, pero también la del rector de la CNE vinculado a la oposición, indican que ello no es posible y que el secreto del voto está asegurado. A pesar de ello, el temor de que no es así ronda a tres de cada diez electores de la oposición y a un número aún mayor de los votantes chavistas. Desde el punto de vista de la confianza en el proceso sería altamente recomendable una campaña de información y propaganda más activa del CNE para disipar estos temores. Algunos críticos del gobierno señalan

que ello no será posible dado a que esta desconfianza juega a favor del candidato oficialista.

Otra fortaleza del sistema es la transparencia de elementos fundamentales para el control y vigilancia de los procesos electorales por partidos, ciudadanos y observadores. Los registros electorales, por mesa, están disponibles. También, las nóminas de las personas a cargo de las mesas electorales que, de acuerdo con la ley, son designados mediante sorteo público por la Junta Nacional Electoral. Los principales encargados electorales de la oposición tienen la convicción de que las personas a cargo de las mesas fueron efectivamente nombradas por sorteo. Además, los opositores en su actual estado de organización, disponen de los nombres de los encargados de todas las mesas del país. Adicionalmente y como es lógico, la legislación reconoce a las candidaturas el derecho a nombrar un testigo por mesa.

El sistema opera a partir de la identificación del elector mediante la máquina capta huellas y la respectiva cédula de identidad. A continuación éste procede a seleccionar el candidato de su elección y emite su voto. La máquina entrega al elector un comprobante impreso con indicación de por quién sufragó, este lo introduce en la caja de resguardo de comprobantes de voto. Terminada la votación y cerrada la mesa, la máquina imprime varias copias del acta de escrutinio, una de las cuales queda en poder de cada testigo, y envía el escrutinio al centro de totalización del CNE. El sistema continúa con la reunión de los presidentes de las mesas de un mismo centro de votación quiénes en presencia de los testigos proceden a sortear las mesas que serán sometidas a una auditoría llamada “verificación ciudadana”, que consiste en un conteo manual de los comprobantes de votos que existen en la correspondiente caja de resguardo. De lo que se trata es de cotejar el acta de escrutinio emitida por la máquina con el conteo manual. Esta auditoría es muy extensa al punto que en las parlamentarias de 2010 ella alcanzó a 20.160 de las 36.563 mesas existentes en el país, vale decir, a un 55,14 por ciento del total.

Finalmente, el CNE publica en la página web o en la Gaceta Electoral los resultados de cada mesa, lo que permite un triple cotejo: el del escrutinio emitido por la máquina; con el acta de la “verificación ciudadana”; y el de ambas constataciones anteriores con resultado de la mesa publicado en la Gaceta Electoral.

El sistema tiene fallas y no es absolutamente inexpugnable --¿hay alguno que lo sea?-- no obstante ello, nuestra convicción es que es confiable, permite su control

y monitoreo por la oposición y observadores nacionales e internacionales y excluye la posibilidad de un fraude masivo que no sea detectable. Aún más, nuestra experiencia en la observación de elecciones en diversos países nos ha llevado a la convicción de que una de las maneras más eficaces de disuadir un fraude y tal vez la única de poder acreditar creíblemente su ocurrencia, es la existencia de resultados a nivel de cada mesa y que quien impugne la validez de los resultados pueda contar con copias fidedignas de las actas a ese nivel.

Una de las mayores falencias --no aludimos a factores políticos, de violencia en los lugares de votación, mediáticos o de otro tipo que serán analizados más adelante-- es la posibilidad de que en las mesas sin testigos de la oposición y donde exista la complicidad de los integrantes de la mesa, antes de su cierre se pueda votar por una opción hasta completar el número de personas que no acudieron a sufragar. De hecho, estudios indican que en las parlamentarias de 2010, en los centros de una sola mesa, la ventaja del PSUV sobre la MUD fue de 66,8 contra 29,7% en circunstancias que a nivel nacional lo que se registró fue un empate. La explicación de esta diferencia puede ser variada pero no es descartable que uno de sus componentes sea el fraude.

Es importante señalar que en las circunstancias difíciles de unas elecciones que tienen lugar en una sociedad muy polarizada, con un discurso oficial extremadamente agresivo y descalificador de los opositores --realidades que son evidentes en Venezuela hoy y que se analizan en las páginas siguientes-- unas elecciones honestas dependen, también, de una oposición con un nivel de organización que le permita utilizar adecuadamente los mecanismos que el sistema electoral habilita para observar y vigilar el proceso. Aun un sistema electoral bien estructurado, y en el marco de una democracia que funcione, puede ser manipulado si una oposición desarticulada no es capaz de tener testigos en las mesas, controlar la integración de ellas, exigir actas de escrutinio, tener observadores en todos los niveles e idealmente contar con sistema indicativo de conteo paralelo. Nuestra impresión es que la oposición agrupada en el MUD cuenta con una estructura electoral de calidad. No sólo disponen de los registros electorales de cada mesa y de los nombres de los encargados de cada una de ellas sino que aseguran que van a disponer de testigos, capacitados por ellos mismos, en todas las más de 37 mil mesas electorales, incluidas aquellas de zonas aisladas y que se ubican en centros con una sola mesa y

en donde sufragará más de un millón y medio de electores. También aseguran estar organizados para reunir actas de escrutinio --las entregadas por las máquinas de votación y por la "verificación ciudadana"-- de una abrumadora mayoría de las mesas.

Un hecho digno de lamentar y del que debemos dejar constancia es la decisión del CNE de sustituir el concepto de "observación" por el de "acompañamiento" electoral, siendo esta última una forma de participación simbólica, carente de real significado. La observación electoral supone un conjunto de atribuciones --y, por supuesto, también de limitaciones-- que constan en una Declaración de Principios de la Observación Internacional de Elecciones que es aceptada por las organizaciones que participan en este tipo de tareas. El CNE, hasta ahora, no se ha allanado a recibir misiones de observación electoral de la Unión Europea y la OEA; ha ofrecido al Centro Carter un "acompañamiento" que éste ha rechazado y sólo resta saber cuál va a ser el rol de Unasur.

Aun cuando no guarde relación con esta elección, que es puramente presidencial, es bueno señalar que en materia parlamentaria una de las más graves fallas del sistema se encuentra más allá de cómo se reciben, cuentan y dan a conocer los votos. Se trata de la fórmula de traducción de sufragios en escaños, la que vulnera uno de los pilares de cualquier ordenamiento electoral: el de traducir de la manera más exacta posible los sufragios en posiciones en el Congreso. Es conocido que en la última elección de la Asamblea Nacional (2010), la oposición obtuvo más votos que los candidatos del gobierno. Pues bien, por la forma de trazar los distritos y las disposiciones para obtener escaños, la bancada oficialista resultó mucho más grande que la opositora.

Dicha fórmula electoral pervierte el significado profundo de la votación: que todos y cada uno de los sufragios tenga aproximadamente el mismo valor. Pensando en el futuro, un acuerdo en relación al trazado de las circunscripciones y a la regla de conversión de votos en escaños, podría ser un punto de encuentro entre las distintas fuerzas políticas para fortalecer la confianza en el sistema electoral.

II.- LAS CONDICIONES DE LA COMPETENCIA

Si la fortaleza del sistema electoral venezolano está en la forma en que se reciben, se cuentan y se dan a conocer

los votos, su debilidad mayor está en unas condiciones de la competencia no equitativas.

En este campo es necesario llamar la atención sobre los medios de comunicación, el financiamiento de las campañas; el abuso de las encuestas, el grado de polarización política, la situación de violencia; el impacto de las políticas sociales y redes clientelares.

La situación de los medios de comunicación

Este es, sin duda uno de los temas dónde la controversia es más aguda pues alude a un asunto estratégico del que depende en buena medida la equidad en la contienda y la calidad del debate público.

En el período del presidente Chávez los medios han tenido variaciones importantes y que miradas con perspectiva hasta se podría hacer un inventario de los errores y fallas que sobre la materia --gobierno y medios-- no deben cometer.

En su ascenso al poder Chávez, según Teodoro Petkoff “cosechó el resultado de quince años de campaña mediática dirigida a la demolición de los partidos políticos, a la demonización de la política y los políticos”, y en 1998, cuando llegó por primera vez a la presidencia, contó con el respaldo de los medios de comunicación privados más importantes, entre ellos *El Nacional* y la cadena Venevisión. Pero a partir del 2000 se desata el enfrentamiento entre el presidente Chávez y los medios de comunicación. En octubre del 2001 el presidente declara que “los medios de comunicación son enemigos de la revolución” y los principales de ellos responden --mucho más que los partidos, que estaban muy desprestigiados-- impulsaron acciones que, lo hayan o no querido, alentaron en la oposición una estrategia antidemocrática que llevó al fallido golpe de Estado, al paro nacional y la huelga petrolera que, dicho sea de paso, constituyeron monumentales errores políticos.

Derrotadas estas operaciones desestabilizadoras el gobierno anuncia su decisión de construir “la hegemonía comunicacional”, para cuyo logro va a utilizar una batería de recursos. De partida la adquisición y creación de medios gubernamentales. Paralelamente se revocan algunas licencias de medios opositores o llegada la caducidad de ellas no les son renovadas. Un instrumento fundamental ha sido el manejo absolutamente discriminatorio del avisaje estatal, cuyo monto se multiplica en la medida que las nacionalizaciones y estatizaciones de empresas aumentan.

El resultado de esto ha sido un nuevo balance de poder en los medios. En materia de diarios la situación que partió muy adversa al gobierno, hoy parece equilibrada. En la televisión el predominio del gobierno es abrumador estimándose que ya en 2007 controlaba 7 televisoras de alcance nacional y 35 televisoras abiertas comunitarias. Como lo han señalado diversos académicos, si en 1999, a la llegada de Chávez, el poder de emisión correspondía al sector privado de la radiotelevisión, ocho años más tarde ese predominio se había trasladado al gobierno.

Pero más allá de estas diferencias en el control y propiedad de los medios, existen otros puntos que parecen preocupantes y sobre los que hay que llamar la atención.

El primero es el uso de las cadenas obligatorias de radio y televisión. Como han reconocido distintos organismos independientes dedicados a monitorear el grado de libertad de expresión, es necesario reconocer el derecho del Presidente de la República a utilizar los medios de comunicación para dar a conocer comunicados de interés público. Pero esa facultad debe ser ejercida con un sentido de la proporción pues si no se transforma, durante las campañas electorales, en una fórmula que desequilibra las condiciones de la competencia a favor del gobierno. La organización Reporteros sin Fronteras indicó que el 2 de febrero de 2010, el presidente Chávez completó, a partir de 1999, dos mil cadenas obligatorias de radio y TV. Estudios posteriores indican que a junio de 2012, esa cifra se había elevado a 2.334 cadenas, con una duración promedio de tres cuartos de hora cada una. Esto da un total de una cadena cada dos días, durante trece años. En el primer mes de la actual campaña el presidente Chávez ha utilizado nueve cadenas obligatorias de radio y TV. El asunto se complica porque el CNE dice carecer de facultades para impedir que el Presidente acuda a las cadenas nacionales.

El segundo, es que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, también llamada “Ley Resorte”, establece la obligación de los medios de transmitir todos los días 10 minutos de avisos institucionales (educacionales, culturales), que según la oposición se han convertido en mensajes proselitistas del gobierno y parte de la actual campaña presidencial.

Tercero, en diferentes momentos desde el gobierno se anatemiza el rol de los medios y se les convierte en enemigos declarados, lo que genera un clima enrarecido y tenso. En este sentido se deben lamentar las atribuciones muy amplias de control y regulación de los medios

que entrega la Ley Resorte y que son administradas por un Directorio donde siete de sus once miembros son nombrados por el Ejecutivo y no tienen ni estabilidad ni plazo de duración en sus cargos. Ese Directorio aplicó al Canal Globovisión, en octubre de 2011, una multa de 2,1 millones de dólares. Además se han reforzado las leyes que sancionan los delitos de “desacato” y “vilipendio” y son conocidos los casos en que se ha utilizado el poder punitivo del Estado para perseguir a periodistas y directivos de medios de comunicación. Medidas como éstas han creado un ambiente de autocensura en que, por ejemplo, dos importantes canales privados de televisión (*Venevisión* y *Televen*), han llegado a un acuerdo tácito con el gobierno y han reducido al mínimo los espacios de comentarios políticos.

Y last but not least, es el uso del avisaje estatal, que es cada vez más importante en la medida que hay una creciente estatización de la economía, es usado como instrumento para comprar la lealtad de algunos medios o para buscar la asfixia económica de los de la oposición.

El financiamiento de las campañas

Recordemos, como si hiciera falta, que el triángulo: partidos, dinero, democracia, se discute en todo el orbe. Dado que no hay política que no reclame recursos económicos, es importante para el fortalecimiento de los sistemas democráticos que el flujo de las aportaciones se encuentre regulado y sea transparente. Para lo cual se requieren también de mecanismos de fiscalización efectivos.

América Latina es una región donde está vinculación entre política y dinero es muy oscura y los intentos de regularla rara vez son cumplidos. Es cierto que en Venezuela la ley entrega al CNE la “función de determinar y regular todo lo relacionado con la financiación de las campañas electorales” y de “velar por el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico en relación con el origen y manejo de los fondos de las organizaciones con fines políticos”. Pero esas funciones no son ejercidas y por tanto el sistema ha sido conducido a una situación indeseable que tiene derivaciones perversas: la opacidad en los ingresos y gastos; la presencia de fondos públicos derivados a las campañas; la acción de dineros privados no identificados. El sistema, además, al erradicar el financiamiento público de campañas y partidos ha agravado estas fallas pues, como lo

prueban muy variadas experiencias, un financiamiento público importante puede ofrecer tres grandes beneficios: transparentar el flujo de recursos hacia los partidos y candidatos, equilibrar las condiciones de la competencia y fortalecer una cierta independencia de los partidos y candidatos en relación a los poderes fácticos y grandes grupos económicos.

La presencia en Venezuela de fondos públicos no regulados en la campaña oficial se ve facilitada por dos hechos: la enormidad de la riqueza petrolera y la falta de control y transparencia en el manejo del presupuesto fiscal.

La guerra de las encuestas

En las últimas décadas las campañas en América Latina han venido siendo acompañadas por rastreos de opinión que informan al público de las altas y bajas de los candidatos y partidos. Las encuestas son un mecanismo idóneo para medir la intención de votos de sociedades cruzadas por la pluralidad, y para evaluar si las diferentes candidaturas crecen o decrecen en el ánimo de los votantes potenciales. Son así un instrumento esencial de las campañas.

En el caso actual de Venezuela estos instrumentos de medición están siendo fuertemente cuestionados. Si bien encontramos casas encuestadoras serias, con una trayectoria respetable y con fórmulas para medir los “humores públicos” que parecen las adecuadas, persiste la impresión –entre no pocos actores políticos e incluso entre el público- de que las encuestas son más armas propagandísticas que instrumentos de medición precisos. Así, al intercambiar puntos de vista con diversos interlocutores, de manera reiterada se descalificaba a las encuestas no tanto por sus resultados, sino por sus supuestas intenciones. Ello tampoco ayuda a forjar una opinión pública informada, sino que las encuestas se ven envueltas en un clima de desconfianza generalizado, al que sin querer parecen también contribuir.

No es fácil pensar en cómo salir de esa espiral de especulaciones que tiende a multiplicar la desconfianza. Quizá, superada esta campaña, propiciar encuentros entre las principales casas encuestadoras para que ellas mismas discutan sus metodologías, sus eventuales desviaciones, los mecanismos de su difusión, etc., en algo pueda contribuir a revertir el

clima de desconfianzas mutuas.

La polarización política

Los encuestadores dan cuenta que en sus rastreos encuentran una sociedad en la que detectan, sí, segmentos duros de la oposición y el gobierno, pero también lo que denominan “chavistas *light*”, “oposicionistas *light*” e “indecisos”. Es decir, detectan que la sociedad venezolana, al menos en una parte, no se encuentra tan polarizada como a primera vista aparece.

Puede ser ello verdad. Pero lo cierto, es que si uno contempla los medios, escucha a los políticos, lee las proclamas que inundan el espacio público, Venezuela aparece como una sociedad no sólo polarizada, sino en extremo polarizada.

Dos grandes bloques electorales son la primera evidencia. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne a dos decenas de agrupaciones políticas y la constelación que gira en torno al PSUV. Se trata de dos alineamientos que prácticamente no dejan espacio visible para otras candidaturas (aunque por cierto, las hay, pero sin, al parecer, mayor impacto político). No hay duda que para la oposición la Mesa Unitaria representa un gran avance que le permite conjuntar sus fuerzas, de tal suerte que en las próximas elecciones habrá solo dos opciones.

Pero dos bloques electorales no son suficientes para hablar de una sociedad polarizada. Por el contrario, podría ser síntoma de una reducción funcional de las opciones que tiene enfrente el universo de votantes. Pero en este caso, se trata de dos coaliciones que encarnan dos visiones no solo distintas de la política y el país, sino claramente enfrentadas. Dos proyectos en tensión que si bien tienen algunos puentes de contacto, suponen desencuentros profundos en asuntos cruciales.

Desde el lado del gobierno se vive la política como una especie de “gesta revolucionaria” donde los adversarios aparecen como enemigos irreconciliables, agentes de fuerzas extranjeras o defensores de intereses inconfesables y minoritarios. Se trataría, desde esa visión, de un conflicto suscitado por el tránsito de “una cultura política capitalista” a otra socialista. Desde esa perspectiva existiría un partido (el PSUV) como la encarnación del pueblo auténtico, mientras sus adversarios serían una especie de anti pueblo. Al propio partido, se le concibe, según sus propios documentos como “un poderoso medio de propaganda, agitación y comunica-

ción”, “como plataforma del desarrollo y fortalecimiento del poder popular”. Su discurso es polarizador y polarizante como fórmula para obtener la cohesión de sus seguidores.

La Mesa de la Unidad Democrática, por su parte, ha realizado esfuerzos conscientes para atemperar la polarización. Subraya la necesidad de la unidad y repudia la política gubernamental de “dividir a los venezolanos”. Y su perspectiva es la de la defensa de la Constitución, que dice, el gobierno ha abandonado. Se trata de un planteamiento que tiende a fortalecer un régimen democrático entendido en sus términos clásicos: reconocimiento de la pluralidad política y ofreciéndole un cauce institucional para su convivencia y competencia. Desea una Asamblea Nacional “que sirva a la sociedad” y que “no esté a las órdenes del presidente de la República o de una parcialidad política”. Los términos que utiliza serían los convencionales dentro de un régimen democrático representativo. Este camino de la oposición hacia posiciones más moderadas y tolerantes ha sido largo, aprendido en las derrotas cuando el mensaje era muy radical, pero que ha encontrado una de sus mayores confirmaciones en las primarias donde la MUD eligió su candidato presidencial y los dos postulantes que representaban las posiciones más moderadas sumaron el 90 por ciento de los votos.

Llama la atención, para ojos extranjeros, que desde el gobierno se impulse la polarización (normalmente los gobiernos llaman a la unidad, bajo la idea de que se trabaja para todos), y sea la oposición la que llame a la moderación (rutinariamente las oposiciones tienden a polarizar en nombre de un cambio por venir).

Es el propio presidente es, con su lenguaje descalificador de todos aquellos que no se alinean con sus políticas, el principal polarizador. Al parecer, es parte de su política: la construcción de dos grandes constelaciones –amigos y enemigos- que por fuerza y necesidad se tienen que enfrentar de manera irreconciliable. Y en ese enfrentamiento el presidente Chávez se convierte en la referencia no solo obligada sino definitiva. A favor o en contra de él parece ser la línea maestra que explica y ofrece sentido a la política venezolana.

Al final, gobierno y oposición encarnan dos lenguajes, dos concepciones, dos ideas enfrentadas que no logran forjar un piso común. No obstante y por lo pronto, ese piso común lo constituye la Constitución y el relevante hecho político que todas las fuerzas reconocen que la única fuente de legitimidad para los gobiernos (fede-

ral, estadual y alcaldes) y los cuerpos colegiados legislativos (Asamblea Nacional), son las elecciones.

Es esa coincidencia la que mantiene en un mismo plano la disputa entre ambas fuerzas. El horizonte electoral, que además genera un calendario de expectativas (primero, la presidencial, luego la de gobernadores y alcaldes, y con posterioridad la Asamblea Nacional), es quizá el cohesionador más relevante dentro de la espiral polarizadora que vive Venezuela.

Creemos que es imprescindible valorar ese hecho político crucial. Porque mientras eso se dé y reproduzca las posibilidades de una convivencia pacífica —aunque tensionada— será necesario reforzar esa vía de acción y competencia. Se trataría de que cada vez más las distintas agrupaciones políticas encuentren garantías de imparcialidad y equidad en el terreno electoral, terreno en el cuál no sólo puedan dirimir el importante litigio por las cargos electivos, sino las posibilidades de convivencia y competencia pacíficas.

Quizá otro de los dispositivos que alimentan la polarización sea el que hace de la elección presidencial un evento no ligado con otras elecciones. El 7 de octubre se elegirá presidente de la República y solo presidente de la República. Ni Asamblea, ni gobernadores ni alcaldes se eligen ese día. Ese diseño en el que se juega una sola posición —que por supuesto es indivisible— es motor eficiente de polarización.

Nos preguntamos, ¿cuál sería el clima si además, por ejemplo, estuvieran en litigio los asientos en la Asamblea? En dichas elecciones nadie gana todo y nadie pierde todo, lo cual ayuda a reforzar la idea de que en democracia las diferentes fuerzas políticas tienen un espacio en el mundo de la representación. Pero tratándose de un solo cargo —y además del más relevante— la contienda se vuelve por todo o nada.

Y no solo eso. En el supuesto de que el candidato de la oposición triunfara, el presidente saliente seguiría manteniendo una mayoría cómoda en la Asamblea y contando con el apoyo de la mayoría de los gobernadores. Ciertamente, éstos últimos se volverán a elegir unos meses después (diciembre), pero lo que deseamos subrayar es lo tensionante que resulta que el Presidente de la República se elija en unos comicios sin la concurrencia de otros poderes.

La violencia y la violencia política

En un escenario tan polarizado la preocupación por

la eventual violencia política no está ausente. Ciertamente, Venezuela vive una violencia delincriminal marcada y al parecer expansiva que es una sombra que acompaña la vida social al punto que organizaciones reconocidas ubican al país con una de las más altas tasas de homicidio del mundo: 45 por cada 100.000 habitantes en el 2010, que se comparan con 33 para Colombia y 23 para México. Sin embargo, llama muy positivamente la atención que estos grados de violencia no hayan trascendido la frontera de la política. Esa es quizá una de las preocupaciones mayores dada la exaltación polarizante del discurso oficial. Hasta hoy, en lo fundamental, la política sigue desplegándose de manera pacífica, pero existe desasosiego y dudas entre no pocos actores políticos sobre lo que pueda suceder a futuro.

Una de las mayores amenazas son los llamados “colectivos”, organizaciones presentes en algunos barrios de Caracas, con un fuerte compromiso con el chavismo y que disponen de armas y ejercen control sobre sus respectivas áreas territoriales.

La llamada “Guardia Territorial” organizada desde el gobierno es un elemento de preocupación adicional. Si bien no se conoce con precisión que tan amplias son y qué tan efectivo es su armamento y si tampoco se sabe con precisión cuáles son sus relaciones con las Fuerzas Armadas, de todas formas generan ansiedad cuando se especula sobre la forma en que actuarían en el marco de una elección muy cerrada.

El impacto de las políticas sociales y redes clientelares

En Venezuela existe un consenso de que los programas sociales del gobierno, las llamadas misiones, son un elemento decisivo en el apoyo que vastos sectores de la población, especialmente entre los pobres, otorgan al presidente Chávez. La oposición denuncia que las formas con que se entregan esas ayudas —que son masivas y que se refieren a salud, educación, subsidios a los precios de los alimentos, vivienda— muchas veces establecen formas de coacción sobre los funcionarios públicos y crean poderosas redes clientelares. Junto con el inicio de la campaña Hugo Chávez ha lanzado dos nuevas “Grandes Misiones”, una a la que ha llamado “7 de octubre”, que es el día de la elección presidencial, y otra la “Gran Misión de Vivienda”, la “Gran Misión Saber y Trabajo”, “Madres del Barrio” “Amor Mayor” y varias más. Cabe señalar que la sola iniciativa de vivienda ha

empadronado a más de quinientas mil personas con la esperanza de obtener una vivienda social y que el conjunto de todas ellas ha significado, en este año de campaña, un aumento significativo del gasto social.

Ciertamente, muchos sectores de la población que figuran entre la base más humilde del chavismo tienden a confundir (o fundir) esos beneficios que entregan las agencias del Estado con la figura del presidente o la militancia en el partido oficial. Se trata de una realidad problemática: ¿Cómo lograr escindir, en el imaginario público, lo que son programas de Estado y derechos de los ciudadanos por un lado, de la utilización política de los mismos y la construcción de clientelas que entienden que deben los beneficios a un líder carismático o a una fuerza política singular?

Es la profunda desigualdad que cruza a todas las sociedades latinoamericanas, la base que da pie a esta distorsión de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Personeros de la oposición nos reconocieron que las misiones han significado una forma de reparto de la renta petrolera que ha permitido que ella alcance a sectores populares que antes estaban excluidos, pero también tuvieron expresiones duras para calificar su naturaleza: desordenada, discrecional, no sustentable y, a veces, origen de nuevas formas de corrupción.

Pero más allá de estas críticas, tal vez la única manera viable de enfrentar el problema por la oposición es ubicar el asunto en un debate racional de las políticas sociales, sus formas y eficacia. En el pasado, uno de los errores de los opositores fue descalificar duramente estos programas lo que permitió al chavismo acusarlos de que querían suprimir esos beneficios asistenciales. La actual campaña de Capriles, en cambio, ha asegurado su continuidad, ha propuesto incorporarlos en la legislación y mejorarlos en su ejecución y eficacia.

III.- LOS PRÓXIMOS MESES

Sin duda alguna, la próxima elección será importante para el destino de Venezuela. La presidencia de la República sigue concentrando un enorme poder real y simbólico. No obstante, no será el único evento que module el futuro del país. Luego de la elección presidencial (7 de octubre) vendrá la elección de gobernadores y alcaldes (16 de diciembre) y la toma de posesión del presidente electo (10 de enero de 2013). Estamos pues no solo frente a una elección sino a un proceso que tiene diferentes capítulos. Las fechas enunciadas son un

ancla, generan certeza de lo que está por venir, pero se conjugan con una eventual contingencia que inunda el espacio político venezolano y que puede materializarse en cualquier momento --o postergarse por largo tiempo-- y alterar el impacto y significado de los acontecimientos. Ese evento variable --que se presta a todo tipo de especulaciones-- es el desarrollo de la enfermedad del Presidente Hugo Chávez.

El cáncer que padece el presidente Chávez es uno de los grandes enigmas que hoy existen en Venezuela. Su naturaleza es un secreto y las especulaciones en torno a él objeto de manipulación por partidarios y adversarios, generándose con ello un escenario político plagado de incertidumbre. Hay quiénes sostienen que se trata de un cáncer terminal, restándole al paciente escasos meses de vida; otros, en cambio, lo declaran curado; y también, están los que reconociendo su existencia aseguran que su desarrollo será lento y que de ocurrir un desenlace fatal tendrá lugar en mucho tiempo más.

Para partir por lo básico, la Constitución, en su artículo 233, precisa los mecanismos frente a esta contingencia. Si llevada a cabo la elección y antes de tomar posesión, se produce la falta absoluta del presidente electo, asumirá el cargo el Presidente de la Asamblea Nacional quien deberá convocar a una nueva elección dentro de los siguientes treinta días. Si asumido el presidente, su falta absoluta se produce durante los primeros cuatro años de su período, asumirá el Vicepresidente Ejecutivo quien deberá convocar a una nueva elección en los próximos treinta días. Si la contingencia se produce en los dos últimos años del período, asume el Vicepresidente hasta completarlo. En el caso que el agravamiento de la salud del Presidente Chávez le impidiera continuar como candidato, la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que un postulante, por razón de muerte o incapacidad, puede ser reemplazado en cualquier momento anterior a la elección.

Si intentar otear el futuro siempre es complejo, en el caso de Venezuela el ejercicio debe tomarse aún con mayor cautela. Nos atrevemos a dibujar apenas algunos escenarios para pensar en lo que puede suceder bajo el impacto de las elecciones presidenciales.

Escenario uno: la elección presidencial es ganada por Hugo Chávez y la oposición reconoce que ha sido derrotada

Esta posibilidad tiene a su vez dos variantes: que la

diferencia de votos entre Chávez y Capriles sea muy amplia o que el resultado sea estrecho. En el primer caso, la oposición tendría pocas posibilidades de impugnar la elección. En el segundo podrían aparecer conductas diversas.

En ambos casos, sin embargo, es probable que se trate de un reconocimiento que no es obstáculo para que la oposición denuncie la injusticia del ambiente en que se realizó el proceso electoral caracterizado por el “ventajismo” en los medios de comunicación, el abuso del gasto público y el clientelismo estatal.

En ese escenario, es probable que la MUD se mantenga unida y ratifique el camino de la lucha político-electoral. Un factor que dentro de la coalición opositora presionará para continuar por esa ruta, mirando más allá del resultado del 7 de octubre, es que diez semanas después, el 16 de diciembre, se elegirán los gobernadores y alcaldes, elección en que por no estar personalizada en Chávez sino en sus representantes, cabe pensar que las posibilidades de la oposición son mayores. Es probable que los candidatos a gobernadores y alcaldes, que fueron elegidos en la misma primaria que designó a Capriles y que éste ha colocado como jefes de su campaña en sus respectivos distritos y Estados, presionen por continuar la lucha electoral. Esta decisión estará influida, además, por otros factores. Uno, es que mientras más estrecha sea la diferencia, mayor el estímulo a continuar en la vía electoral; el otro, es la salud del presidente Chávez pues de agravarse alentarán la idea de que hay una nueva contestación presidencial cercana.

Escenario dos: la elección presidencial es ganada por Hugo Chávez, la oposición se divide y un sector significativo de ella impugna su triunfo

Este escenario es resultado de una pregunta crucial: ¿será la oposición capaz de mantenerse unida si su candidato presidencial no obtiene el triunfo en las urnas? Creemos que lo más probable es que sí, por lo apuntado en el escenario uno. No obstante, existe una posibilidad de que la oposición se escinda por quienes además de denunciar “el ventajismo” acusan la existencia de un fraude masivo en las mesas electorales y en los escrutinios, aunque no esté sostenido con “pruebas plausibles”. Estos sectores —estamos especulando— levantan de nuevo la bandera del abstencionismo y, aunque no lo digan, buscan una salida extra constitucional a la crisis. Puede ser el peor escenario para la oposición pues la de-

jaría fuertemente dividida, debilitada para enfrentar las elecciones de gobernadores de diciembre y relativamente aislada internacionalmente.

Por supuesto en este escenario será crucial la reacción del propio candidato Capriles cuya tarea central quizá sea la de mantener unida a la oposición.

Escenario tres: Henrique Capriles gana y el gobierno reconoce su triunfo

Al igual que en los anteriores escenarios existen dos posibilidades: que Capriles gane con una ventaja clara y definitiva o que lo haga apenas por un margen muy estrecho. Sobra decir que en la primera opción existen más posibilidades de que el gobierno acepte su derrota.

Un escenario como el planteado tendería a normalizar las relaciones políticas en el país, asentaría la confianza en el sistema electoral y quizá generará mejores condiciones para una germinal convivencia democrática.

No obstante, la elección de Capriles y su reconocimiento por el gobierno de Chávez abre, también, un escenario complejo. De partida, entre la elección del nuevo presidente y su asunción al cargo median 90 días, un plazo que por ser excesivamente largo puede constituir una oportunidad para agravar tensiones y desencuentros. Una vez asumida la presidencia la situación del nuevo jefe del Ejecutivo será precaria pues no contará en principio con la mayoría de la Asamblea Nacional y ello por el siguiente año y medio; hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones; tendrá que convivir con un Tribunal Supremo de Justicia que está bajo control de Chávez y el partido de gobierno, situación que se extiende, de modo similar, a otros poderes del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el propio CNE. Tal concentración del poder en manos del chavismo le plantea a la oposición enormes dificultades de gobernabilidad; sin embargo, visto el asunto desde otro punto de vista, esta realidad puede ser un factor que reste dramatismo a la decisión de reconocer la derrota, pues aún perdiendo el poder presidencial, el chavismo será institucionalmente la fuerza dominante, ello sin considerar que a los poderes mencionados se agrega una fuerza electoral nada despreciable, el control de 15 de las 23 gobernaciones y de la mayoría de las alcaldías.

Si ello sucediera, las dificultades anteriores obliga-

rán al eventual gobierno de Capriles a desarrollar una sofisticada acción política tendiente, primero, a mantener la unidad de las fuerzas que lo apoyaron; pero, a la vez --lo que va a crear tensiones con sectores del propio campo-- una política de apertura que le permita encontrar aliados tácticos, e incluso estratégicos, en sectores del chavismo.

Escenario cuatro: Henrique Capriles gana y el gobierno (o sectores del gobierno) no reconoce su triunfo

Este escenario es quizá el más complejo y potencialmente disruptivo. Naturalmente será más grave para el gobierno en la medida que la victoria opositora sea mayor y las pruebas de fraude más sólidas. En este caso el rol de las Fuerzas Armadas puede ser decisivo al igual que la influencia de la presión o condena internacionales.

Solo lo apuntamos porque estaríamos ante un escenario más que delicado, peligroso. Como se ha dicho en el capítulo inicial de este Informe, el sistema electoral venezolano no permite un fraude masivo que no pueda ser detectado --y probado-- por una oposición eficiente. El diseño del mismo y la presencia opositora en casi todos los eslabones del proceso hacen muy difícil un fraude en el sentido tradicional del término: la alteración de los resultados que surgen de las urnas. Debemos recordar que la oposición tiene el derecho y al parecer la capacidad de contar con testigos en todas las mesas; esos testigos pueden recoger las actas de escrutinio de su respectiva mesas y pueden acumularlas en una organización central; además existe la presencia de testigos en las auditorías de verificación ciudadana (que alcanza a algo más del 50 por ciento de las mesas) y otra vez pueden recogerlas para acumularlas en una organización central; además se lleva a cabo un conteo paralelo mesa por mesa; y puede exigírsele al CNE la publicación en su página web de los resultados mesa por mesa. Todo ello creemos hace muy difícil un fraude en el sentido tradicional del término.

No obstante, la denuncia --con pruebas plausibles-- de un fraude masivo puede ser un golpe muy duro a la legitimidad del presidente Chávez. Pero, a su vez, la denuncia por la oposición de un fraude que no se funde en elementos como los que se han mencionado en el párrafo anterior puede desacreditar a la oposición, internamente y, sobre todo internacionalmente, reduciendo su apoyo a sectores conservadores en el exterior, inclu-

yendo a Estados Unidos y, en menor grado, en Europa y América Latina.

Si efectivamente la oposición está en condiciones de hacer de su denuncia un caso convincente, la situación puede ser extremadamente tensa. En esa circunstancia el CNE tendría que negarse a dar a conocer resultados mesa por mesa --de los que de acuerdo al sistema dispone-- y suplantarlos por totales nacionales o por Estados, lo que sería un claro indicio de fraude. Creemos que es poco probable, porque una vez desatado el procedimiento de votación este va estrechando los márgenes de maniobra del propio CNE.

Es dable suponer que una situación de este grado de tensión pudiera desatar alguna violencia callejera con la cual entraríamos no solo a un escenario indeseable sino altamente peligroso, que podría tentar al gobierno a establecer el Estado de emergencia o de Sitio. La reacción internacional --de gobiernos y de la opinión pública internacional-- podría ser significativa.

Es dable suponer también, que ante la evidencia de la derrota del gobierno --así como ha ocurrido en otros países en situaciones similares-- se abra la misma noche de los escrutinios, al interior del gobierno, un debate acerca de si reconocer o no el triunfo opositor. Es un tiempo crucial que puede durar varias horas y en el que se debe mirar con especial interés a Fuerzas Armadas. El rol de países que tengan cercanía o influencia sobre el gobierno puede ser importante, situación en que se encontrarían Brasil, Cuba, incluso Colombia. También la Unión Europea. Estados Unidos, en cambio, debiera ser cauteloso de emitir opiniones en las horas iniciales de este escenario.

La enfermedad de Chávez

No cabe duda que de producirse --empleando el término de la Constitución Bolivariana-- una “falta absoluta” de Chávez, nos encontraremos ante un hecho político de tal magnitud que influiría en todos los escenarios posibles, variando grandemente sus efectos.

La idea de que a la desaparición de Chávez sigue la del movimiento que él creara (“no hay *chavismo* sin Chávez”) es, a lo menos, dudosa. Contrario a ese predicamento, es probable que en medio de tensiones y crisis, el movimiento sobreviva. Los analistas que sostienen esta tesis encuentran en el peronismo un símil: populista, nacionalista, afincado en sectores económica y socialmente postergados, con una ideología débil pero

gran fuerza electoral, una subcultura, capaz de reunir en su interior tendencias variadas que vayan desde la derecha hasta la izquierda y que al igual que el peronismo, puedan dar origen a alternativas de derecha (Menem) o más a la izquierda (Cristina Fernández). De salvar su unidad el chavismo, aun después de la desaparición de su líder y fundador, sería una constante en la política venezolana e incluso, uno de los partidos mayores sino el mayor.

Pero si este es el desarrollo más probable, la primera prueba de que sea posible la dará el nombramiento de su sucesor, lo que no es fácil dada la muy pobre estructura institucional del PSUV y el personalismo del régimen. Además de Chávez, no hay un cuerpo político colectivo que pueda resolver este asunto. En estas circunstancias el juego consiste en influir sobre la decisión del presidente. Fuera de la naturaleza del cáncer de Chávez, éste es el otro asunto que desata las mayores especulaciones. Algunos dicen que en el nombramiento de su sucesor, la decisión será dinástica recayendo en su hermano Adán o, incluso en una de sus hijas; pero Adán es considerado demasiado radical y carente de carisma. Si la decisión recae en un político, los rumores indican que la disputa está entre el Vicepresidente, Elías Jaua; el Ministro de Exteriores, Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, y mayormente entre estos dos últimos lo que ha originado una pugna que ya es evidente y que soterradamente empieza a provocar alineamientos y descalificaciones. Maduro es acusado de ser favorito de aquellos más cercanos a Cuba, de estar más a la izquierda y de gozar de mayor aceptación entre

los países del Alba y Brasil; a Diosdado se le moteja, por sus detractores, de derechista, lo que es anatema, y se le considera más fuerte en el partido y con estrechos vínculos con los militares. Para complicar más las cosas, no hace mucho Chávez ha pedido a Jaua que, en diciembre, sea candidato a gobernador por Miranda, lugar donde tiene escasas oportunidades de ganar. De mantenerse esta decisión Chávez deberá nombrar dentro de los próximos noventa días a un nuevo Vicepresidente de la República lo que agitará aún más las aguas en torno de su sucesión.

Aunque marcados por el secretismo y objeto de intrigas y especulaciones, los temas anteriores --salud y sucesión-- son asuntos de la mayor importancia y de la forma como ellos se resuelvan depende, de modo importante, lo que ocurra en Venezuela en los próximos meses y años. Para el futuro del PSUV, la propuesta de sucesión es decisiva. Si es aceptada como razonable por las diferentes corrientes o sensibilidades, reforzará el poder del movimiento. Por el contrario, si ella fuera equivocada no se debe descartar que arriesgue si no una división, al menos deserciones significativas.

En lo que respecta a las estrategias de la oposición, la evidencia de un agravamiento de la salud de Chávez, sin duda reforzará la tendencia a mantenerse en el curso de las competencias electorales. Demás está decir que una división del chavismo, a propósito de la sucesión, abriría espacios de maniobra a la MUD, aumentando no sólo sus expectativas de llegar al poder sino las posibilidades de gobernabilidad.